

UNIVERSITAS
HUMANISTICA

Universitas Humanística

ISSN: 0120-4807

revistascientificasjaveriana@gmail.com

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Restrepo, Gloria Inés

Memoria e historia de la violencia en San Carlos y Apartadó

Universitas Humanística, núm. 72, julio-diciembre, 2011, pp. 157-188

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79122328008>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Memoria e historia de la violencia en San Carlos y Apartadó¹

Gloria Inés Restrepo²

Grupo de Memoria Histórica (CNRR), Colombia³
gloriainesrestrepo@gmail.com

Recibido: 30 de septiembre de 2011

Aceptado: 25 de noviembre de 2011

¹ El presente artículo resulta del trabajo de grado: “Memoria e historia de los procesos de violencia en los municipios de San Carlos y Apartadó: 1980-2005”, presentado en la Maestría de Historia de la Universidad de los Andes y dirigido por el profesor Gonzalo Sánchez.

² Magister en Historia, Universidad de los Andes. Socióloga, Universidad Nacional.

³ Asistente. Docente de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia.

Memoria e historia de la violencia en San Carlos y Apartadó

Resumen

En el presente artículo se indaga por la producción de los recuerdos de los hechos de violencia en dos municipios antioqueños que desde la década del 80 han presentado alarmantes indicadores. Es así como en el municipio de San Carlos se recuerdan los hechos de violencia en el marco de una sociedad católica, con condiciones económicas homogéneas, con élites históricamente vinculadas al partido conservador, procesos acelerados de desarrollo y bajo dominios armados hegemónicos. En este escenario se construye un cierto consenso en el relato de la violencia que busca dignificar a las víctimas y que resalta los altos costos de la confrontación armada. En el municipio de Apartadó se recuerda la violencia en el marco de una sociedad pluriétnica, laica, marginal, en medio de procesos de desarrollo acelerados y dominios armados inestables. Allí se produce una memoria dividida marcada por identidades políticas, que rutiniza los hechos violentos y en ocasiones los justifica. Frente a estos casos se busca dejar la siguiente reflexión: ¿qué tipo de memorias se necesitan para no reproducir la guerra?

Palabras clave: memoria de la violencia, Apartadó, San Carlos, producción de la memoria, memoria y poder.

Memory and history of violence in San Carlos and Apartadó

Abstract

This paper inquires into the production of memories on violent events in two Antioquia municipalities, which from the 80's have shown alarming violence indicators. Thus, in the municipality of San Carlos violent events memories are framed within a context of a catholic society having homogeneous economic conditions, elites historically pertaining to the Conservative party, accelerated development processes, and living under hegemonic armed rule. In this scenario a certain consensus is achieved in the narrative of violence, aiming at dignifying victims and highlighting the high costs armed confrontation entails. In the municipality of Apartadó, violence memory is framed within a pluri-ethnic, lay and marginal society, immerse in accelerated development processes and unstable armed rule. There, a split memory is produced, featuring political identities routinizing and eventually justifying violent events. In the face of these cases, an attempt is made to keep the reflection on what kind of memories are required to stop reproducing war?

Keywords: Memory of violence, Apartadó, San Carlos, production of memory, memory and power.

Memória e historia da violência em San Carlos e Apartado

Resumo

No presente artigo indaga-se sobre a produção das lembranças dos fatos de violência em dois municípios do departamento de Antioquia que desde a década de 80 apresentam alarmantes indicadores. É assim como no município de San Carlos são lembrados os fatos de violência dentro de uma sociedade católica, com condições econômicas homogêneas, com elites historicamente vinculadas ao partido conservador, processos acelerados de desenvolvimento e sob domínios armados hegemônicos. Neste cenário se produz certo consenso no relato da violência que procura dignificar as vítimas e que destaca os altos custos da confrontação armada. No município de Apartadó lembra-se a violência dentro de uma sociedade multiétnica, laica, marginal, no meio de processos de desenvolvimento acelerados e domínios armados instáveis. Ali se produz uma memória dividida marcada por identidades políticas que banaliza os acontecimentos violentos e em ocasiões os justifica. Diante desses casos procura-se deixar a reflexão de que tipos de memórias são necessárias para não reproduzir a guerra?

Palavras chave: Memória da violência, Apartadó, San Carlos, produção da memória, memória e poder.

Introducción

María Teresa Uribe afirma que las guerras no son mudas; que conllevan múltiples narraciones que no copian la realidad sino que la resignifican con el objetivo de lograr adhesiones y respaldos en medio de complejas tramas de dominio y control (Uribe & López, 2006). Estas narraciones entran en juego con el propósito de construir versiones legítimas sobre la guerra. Los diferentes actores, protagonistas y víctimas de la violencia luchan por definir y nombrar el pasado, por legitimar sus narraciones. Se construyen así unas narrativas oficiales y otras alternativas que se refugian en el mundo de la memoria privada.

En el presente artículo se pretende abordar el problema de la construcción de la memoria sobre la historia de la violencia en el contexto colombiano. En la medida en que aún parece imposible pensar en una narrativa nacional de la violencia por la diversidad del fenómeno a nivel regional, se optará por trabajar estas narrativas desde la perspectiva local y más específicamente desde el ámbito municipal en los últimos 30 años. Me pregunto por cómo se ha construido el recuerdo de la violencia en los escenarios locales. Bajo este marco resulta interesante el caso de Antioquia que, junto con Arauca, es el departamento que registra mayores niveles de violencia, medida por homicidios entre 1980 y 1997 (Cubides *et al.*, 1998, p. 253); tendencia que se mantiene en el primer decenio del siglo xxi. En el departamento llaman la atención las dinámicas de zonas como Urabá, Oriente, Nordeste minero y Magdalena Medio (Cubides *et al.*, 1998, p. 253). En el Oriente Antioqueño y en Urabá se presentan dos casos que serán el eje de este trabajo, se trata de los municipios de San Carlos y Apartadó; municipios con historias difíciles de violencia y con diferentes estrategias para recordarla.

Se partirá entonces en este artículo de una indagación teórica sobre la producción de la memoria. En el segundo apartado se intentará indagar por las historias municipales y su capacidad para enmarcar los recuerdos. A partir de estos marcos se buscará en un tercer apartado comprender el proceso de construcción de las historias locales de los hechos de violencia, a través del contraste de las narraciones y de la reconstrucción de los juegos de memoria de diferentes actores de los municipios de Apartadó y San Carlos entre 1980 y 1990. Narraciones que, por lo general, pretenden explicar y disputarse la última palabra sobre lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó y cómo hacer para que estos hechos no se repitan.

Para lograr hacer esta reflexión se consultaron y contrastaron múltiples tipos de fuentes. Narraciones de víctimas y victimarios constituyen las fuentes que desde el presente hablan sobre lo que ocurrió. Por otro lado, se utilizan fuentes construidas mientras sucedieron los hechos de violencia: los reportes de prensa y los documentos de archivo. En el caso de Apartadó se trabajó con 547 artículos de prensa, 122 documentos de

archivo encontrados en el Archivo de la Gobernación de Antioquia y el Archivo Municipal de Apartadó, 52 entrevistas a víctimas realizadas por diferentes autores y 45 entrevistas y comunicados de grupos armados. En el caso de San Carlos se acudió a 209 artículos de prensa, 413 documentos de archivo encontrados en el Archivo de la Gobernación de Antioquia, el Archivo del municipio de San Carlos y el Archivo del Centro para la Atención y la Reconciliación, 20 entrevistas con víctimas de la violencia y 16 documentos y entrevistas con miembros de grupos armados con influencia en el municipio.

¿Historizar los recuerdos de la violencia?

Ante las diversas narraciones de los hechos violentos, el historiador enfrenta el reto de elaborarlas de manera crítica dentro de una reconstrucción de la violencia con pretensiones de objetividad o de entender e historizar su producción. Se asume en este artículo la apuesta por entender el proceso de producción de los recuerdos. En esta tarea se hace inevitable comprender inicialmente a nivel teórico en qué consiste este proceso.

Generalmente, se entiende la memoria como «facultad psíquica con la que se retiene y recuerda el pasado» (Ricoeur, 2004). Se retiene el pasado en tanto hábito que permite incorporar la experiencia a la vivencia presente y en tanto recuerdo que implica la construcción de narraciones a través de las cuales se comunica y se dota de sentido a lo que ya pasó. Recordar no es entonces un proceso pasivo; por el contrario, «no querer librarse» de hechos pasados es un proceso activo. La memoria implica, por tanto, un esfuerzo que abarca un proceso cognitivo de reconocimiento (Ricoeur, 2004).

En ese esfuerzo se recuerdan y marginan ciertos rasgos de los hechos (Todorov, 2000, p. 22). El olvido, afirma Augé, moldea al recuerdo «como el mar moldea los contornos de la orilla» (Augé, 1998, p. 27). Permite «transformar, asimilar el pasado, cicatrizar las heridas, reparar sus pérdidas» (Piper, 2005, p. 33). Se olvida el recuerdo, la impresión que los hechos dejaron en la memoria (Augé, 1998, p. 23). Sin embargo, no todos los olvidos son convenientes, también existen olvidos impuestos y manipulados (Jelin, 2001).

La relación con el pasado parece entonces un asunto estrictamente individual. Cada persona arma una versión que mezcla los hechos objetivos, las construcciones subjetivas y la imaginación. Ese relato individual depende del interlocutor y de las perspectivas y proyectos personales.

Afirma Halbwachs que la memoria individual se constituye en un punto de vista de la memoria colectiva (Halbwachs, 2004). Argumenta además Rousso que el sentido del pasado cambia y con él la relevancia

y el significado dados a ciertos acontecimientos. Cada momento de la historia trae una configuración particular que permite que una sociedad recupere algunos eventos y rasgos del pasado y olvide otros (Rousso, 2003).

Las narrativas del pasado adoptan un rol normativo, portan un modelo de acción con una altísima relevancia ética y política. Tal relevancia depende, sin embargo, de la disposición de los actores a identificarse con un futuro colectivo común (Knap, 1989).

A su vez, entre diferentes grupos se presentan disputas por la versión colectiva del pasado. Disputas en las que no solo está en juego la precisión sobre lo que pasó, sino también la incidencia de esa versión sobre el presente (Bonilla, 2008). El espacio por excelencia de disputa de la memoria son las comunidades políticas. La dominación política presupone la imposición de una memoria hegemónica. La lucha por la hegemonía, sin embargo, nunca está saldada, los relatos que se imponen a través de la hegemonía nacional son constantemente renegociados, resignificados, reactualizados e incluso rechazados por los subalternos. Se trata de una confrontación constante entre grupos sociales por el contenido de lo que se ha de recordar y por la extensión de lo que se ha de olvidar (Ansaldi, 2002, p. 87).

Recordar implica entonces una actividad política que adquiere particularidades en contextos de guerra en donde se presenta una confrontación entre excesos de memoria protagonizados por las víctimas y excesos de olvido promulgados por los sectores de poder, bien por culpas, bien por miedo a perder legitimidad (Jelin, 2001). Como lo argumenta Van Evera las narrativas de la guerra son determinantes para mantener y justificar la confrontación o bien para terminarla (Van Evera, 2002).

El gran problema en la construcción de la memoria en contextos de guerra radica entonces en la pregunta formulada por Gonzalo Sánchez: ¿cuánta memoria y cuánto olvido requiere una sociedad para superar la guerra?, ¿cómo construir historias de la violencia que no perpetúen la confrontación? (Sánchez, 2003). Al respecto, Todorov advierte el riesgo de preservar los sucesos traumáticos en su literalidad, en la medida en que someten el presente al pasado. Muestra entonces la posibilidad de un uso ejemplar de la memoria que, sin negar la singularidad de los sucesos, permita comprender lo que pasó y proyectar situaciones nuevas. Se trata de convertir el pasado en un principio de acción para transformar el presente, de liberar al presente del trauma (Todorov, 2000).

Esto implica enfrentar las luchas de poder que están detrás de la transmisión de la violencia y dar respuesta a las llamadas “memorias tóxicas” de la guerra que «prolongan en el tiempo los traumas y sus

efectos distorsionadores de la realidad y la experiencia» (Del Pino, 2003). En este marco resultan pertinentes las reflexiones de Avishai Margalit, quien habla de un deber moral del recuerdo que asegure la no repetición de los hechos, de la necesidad de construir versiones colectivas de los hechos que transformen los sentidos del pasado y fundamenten de una nueva manera a las comunidades de recuerdo (Margalit, 2002).

La revisión teórica permite entonces comprender que para acercarse a los procesos de construcción de la historia de la violencia y para entender por qué estos procesos dan lugar o no a escenarios de reconciliación es necesario entender cómo se construye el relato colectivo que contiene los recuerdos y olvidos individuales, las tramas colectivas, los juegos de poder entre hegemonía y disidencia y el interés o no de superar los traumas. Se intentará comprender entonces el relato colectivo a través de dos preguntas fundamentales que se trabajarán en lo que resta del presente artículo: ¿Cuáles son los marcos sociales en los que se produce el recuerdo? y ¿cuáles son los juegos de memorias que intervienen en la construcción de la narración de la violencia?

¿Cuáles son los marcos sociales del recuerdo en San Carlos y Apartadó?

Maurice Halbwachs argumentó en *La Memoria Colectiva* que incluso nuestro ejercicio más individual de rememoración se encuentra limitado por la espacialidad y temporalidad de los grupos a los que pertenecemos (Halbwachs, 2004). El espacio no solo constituye un escenario o un recurso nemotécnico. Puede entenderse, desde la perspectiva de Joanne Rappaport, como un componente estructurante que organiza la forma en que los hechos históricos se recuerdan y organizan (Rappaport, 2000, p. 40). Por su parte, la duración, a pesar de su multiplicidad y heterogeneidad, constituye una realidad plena que nos permite retener y recordar los hechos que han sucedido en el tiempo (Halbwachs, 2004, p. 99). Indagar por los marcos sociales del recuerdo en Apartadó y San Carlos es intentar comprender la configuración espacial e histórica de estas sociedades que intentan tramitar los recuerdos de la violencia a finales del siglo xx y comienzos del xxi.

La configuración territorial.

San Carlos de Priego se fundó como colonia agrícola en el Valle del Corpus Christi, descubierto por Francisco Núñez de Pedroso en el siglo xvi en las expediciones que buscaban minas de oro en Antioquia. Francisco Lorenzo de Rivera fundaría la población en 1776 bajo la influencia tradicional y conservadora de Marinilla (Castaño, 1996, p. 46). Se ofrecía a los colonos «la morada y la labor» con el propósito de reducir la presión poblacional sobre Marinilla y Rionegro. Desde la

fundación, el poblado enfrentó serios retos para consolidar la economía: disputas por la propiedad de la tierra, problemas de comercialización, falta de capital, crisis de productividad, entre otras. A pesar de estas situaciones el municipio ha vivido de múltiples auges: minería, comercio, productos agrícolas, etc. Así, al ritmo de estas actividades surgieron las élites tradicionales del municipio ligadas principalmente al partido conservador (s.a., 1989, p. 11); élites que desde la fundación estuvieron inscritas al proyecto nacional. Muestra de ello fue su activa participación en las guerras de independencia y en las guerras civiles a favor de las posturas clericales y conservadoras (Henao, 1990, p. 40).

Mediante la ordenanza 07 se erigió Apartadó, el 30 de agosto de 1967, cuando se independizó del municipio de Turbo. El municipio se ubica en la región de Urabá, que se constituyó históricamente como zona marginal, resultado de las dificultades de control en la época colonial, las pugnas administrativas y la resistencia indígena (Uribe, 1992, p. 82). Se trataba de una frontera ilegal y en disputa. Cuando se instauró la República la región contaba con escasos poblados, refugio de diversos grupos sociales excluidos: esclavos fugados, indígenas que llegaron tras la disolución de los resguardos, derrotados de las guerras civiles, entre otros (Uribe, 1992, p. 42). Los pobladores desarrollaron economías de subsistencia, pero también se vincularon a la extracción de recursos agrícolas y mineros que tendría su auge en el siglo XIX. Como resultado de la extracción surgió el poblado de Apartadó, adonde llegaron miles de recolectores en busca de tagua y raicilla de ipecuana. Las economías extractivas dejaron una estructura económica regional basada en la explotación de recursos, la acumulación de capital, el establecimiento de sistemas de endeude y el protagonismo de las bonanzas (García, 1996).

Como resultado de su historia en San Carlos se concreta el *ethos* antioqueño y se crean apasionadas pertenencias al proyecto nacional. En contraste, Apartadó se mantiene durante siglos como zona de conflicto, contrabando y resistencia con una precaria integración a la nación. Surge así en el municipio urabaense una sociedad pluriétnica con costumbres diversas y poco arraigo a la región. Las diferencias en la integración parecen marcar las relaciones con el territorio, mientras que en San Carlos se impulsaron las economías campesinas, en Apartadó predominaron las economías extractivas que convocaron población flotante motivada por el ritmo de las bonanzas.

Una sociedad históricamente excluida y con alta movilidad como la de Apartadó puede tener menor arraigo territorial que la sociedad de San Carlos, más integrada y con vínculos basados en la identidad territorial. Las diferencias en la identidad y la relación con el territorio pueden producir vulnerabilidades distintas frente a los hechos violentos y

formas diferentes de asimilarlos. Otras determinaciones de la identidad como la religión marcan también profundas diferencias en el recuerdo y el nivel de conformidad con los hechos violentos.

Sociedades y movilización.

La constitución de élites e identidades conservadoras determinaría la configuración de la sociedad sancarlitana. La presencia en el pueblo de familias liberales con alta influencia económica, social y política, generaría en 1930 la primera ola de violencia protagonizada por los fundadores conservadores. Bajo esta lógica y en el marco de “La Violencia” bipartidista de los 50, San Carlos se constituyó en lugar de control político para evitar el avance de las guerrillas liberales. La violencia trajo desinstitucionalización, pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales, abstención electoral y surgimiento de nuevas alternativas como el Rojismo y el Anapismo (s.a., 1989, p. 6). Los viejos líderes políticos se enfrentarían a estas fuerzas terceristas en el marco del Frente Nacional. La confrontación dejó como resultado la muerte de líderes políticos, la extensión de la delincuencia común y la cancelación de los contratos con la Anapo. (Henao, 1990, p. 40). A través de la guerra y la confrontación, el Partido Conservador logró entonces un dominio histórico en el municipio. En la década del 70 la vida política giraba en torno a este partido, que ya no contaba con contendores fuertes (Uribe & Botero, 1998, p. 135).

En 1978, San Carlos se constituyó en protagonista del “Sistema Oriente”, que buscaba generar el 35% de la energía nacional y conectar a la Costa Atlántica con el interior del país. Se construyeron entonces en el municipio las centrales hidroeléctricas de San Carlos, Jaguas y Calderas. Justo cuando la economía municipal lograba estabilizarse, los proyectos hidroeléctricos trajeron un desarrollo acelerado con importantes impactos sociales, económicos, ambientales y culturales (Uribe & Botero, 1998, p. 135). A los impactos de la construcción de las hidroeléctricas se sumó el descontento por las irregularidades que se presentaron en las negociaciones entre el Concejo municipal y las Empresas Públicas de Medellín. El descontento fue canalizado por una nueva élite conformada por profesionales, empleados públicos, comerciantes que después de estar en otras ciudades regresaron al municipio rescatando las organizaciones y programas cívicos (Henao, 1990, p. 64). Esta nueva élite, unida a la fracción liberal de la élite tradicional, el servicio educativo, los pequeños comerciantes y los campesinos excluidos, se agruparía alrededor de la Unión Cívica Municipal. El movimiento de San Carlos se inscribía en el marco de los Movimientos Cívicos del oriente Antioqueño, que desde la década del 60 se manifestaron por la prestación de servicios públicos (Novoa, 2009, p. 66). La intolerancia ideológica y política de los 50 revivió desintegrando violentamente al movimiento impulsado por las nuevas generaciones (Henao, 1990).

La precariedad estatal sumada al predominio de economías extractivas en la historia de Urabá hizo que allí surgiera una particular estructura de poder en la que predominaba la ley del más fuerte ejecutada por contrabandistas, caciques políticos y Bandoleros (Steiner, 2000, p. 94). El dominio y legitimidad de los partidos estaban mediados por sus posibilidades de garantizar los derechos y servicios que el Estado históricamente no había proporcionado a los habitantes de la región. Urabá, sin embargo, se constituye como bastión liberal casi hegemónico (Ortiz, 1999). Esta estructura de poder construida en el proceso de colonización se pondría a prueba a mediados del siglo xx, cuando su población creció en un 204% como respuesta a las potencialidades de la industria bananera, la terminación de la carretera al mar y las posibilidades de refugio que ofrecía la región (Ramírez, 1997, p. 31).

Los municipios del eje bananero se constituyeron entonces en polos de desarrollo que atrajeron a migrantes de diversas regiones. La agroindustria generó ganancias no previstas y posicionó la zona en el mercado internacional. Sin embargo, los resultados macroeconómicos estuvieron acompañados de altos costos sociales⁴. Estos costos generaron una situación de permanente conflicto alrededor de la tierra, los servicios y el trabajo (García, 1998). Surgieron movimientos sociales de diverso tipo: sindicatos, movimientos cívicos y movimientos campesinos, a los que el Estado respondió con acciones militares (Ramírez, 1997, p. 143). La movilización social generó fuertes identidades que se radicalizaron con la influencia de los actores armados.

Es importante notar que en los dos municipios, los megaproyectos cambiaron la historia local, alterando las dinámicas económicas y demográficas. Estas transformaciones generaron procesos de movilización social que en los dos casos fueron reprimidos, dejando un estigma sobre cualquier forma de organización. La represión de los movimientos cívicos en San Carlos se constituyó en el mito fundacional de la violencia. Un mito compartido que no genera divisiones entre los sancarlitanos. En Apartadó la historia de la movilización sí genera divisiones en la medida en que al mismo tiempo fue reprimida y permeada por los actores armados. Surgieron entonces identidades militantes según la adscripción a la organización social. Identidades que chocan y marcan la construcción de memorias diversas sobre los hechos de violencia.

⁴ Las nacientes instituciones municipales no estaban preparadas para las crecientes demandas de la población: los campesinos colonizadores se convirtieron en corto tiempo en obreros agroindustriales, surgieron acelerados procesos de diferenciación interna a nivel económico y tecnológico, se transformó la estructura de poder local con el ascenso de una élite ausente y externa, entre otras (García, 1998).

La confrontación.

Algunos autores remiten los orígenes de la presencia guerrillera en el Oriente Antioqueño a la expansión y desdoblamiento del Frente IV de las FARC. Desde 1982 establecieron focos iniciales de los frentes 9 y 47 en algunos municipios del Oriente, entre ellos San Carlos (López, 2005, p. 82). Por su parte, el ELN fundó en 1986 el frente Carlos Alirio Buitrago basado en el trabajo político desarrollado por el sacerdote Bernardo López Arroyave en el Oriente Antioqueño (López, 2005, p. 84). El frente tendría presencia en la zona de Embalses hacia 1990. Desde la década del 70 la región resultaba de gran interés para las guerrillas por su potencial económico y en infraestructura. Además contaba con condiciones sociales para la conformación y asentamiento de guerrillas rurales (Ocampo, 2005). Paralelo al establecimiento de las guerrillas, arribaron a algunas veredas del municipio las Autodefensas del Magdalena Medio, lideradas por Ramón Isaza. Las acciones del MAS (Muerte a Secuestradores) buscaban forzar a los pobladores, mediante asesinatos y amenazas, a abandonar la zona por supuesta colaboración con la guerrilla. Se trató de un proceso de criminalización de la protesta que marcó como objetivos militares a los líderes de los movimientos cívicos. Esta primera presencia paramilitar fue temporal; no buscaron establecerse en el municipio (Caicedo, 2006). A pesar de las acciones de los paramilitares, los grupos guerrilleros lograron consolidarse en la región.

El avance territorial de la guerrilla se vio frenado por la nueva irrupción de las autodefensas del Magdalena Medio con el Bloque José Luis Zuluaga y el Bloque Metro en 1997 (Observatorio de Paz y Reconciliación, 2007, p. 11). Entre 1997 y 2002, se disputaron el control del área urbana de los 23 municipios del oriente (Caicedo, 2006, p. 15). La presencia paramilitar coincidió con el fortalecimiento de las acciones militares en la región. Si bien en la década del 90 el ejército había desarrollado las operaciones Audaz, Lusitana, Estrella y Emperador, nunca habían tenido las dimensiones de la ofensiva emprendida a partir del 2002 con las operaciones Meteoro, Marcial, Espartaco, Ejemplar y Falange 1 (Ocampo, 2005). Las acciones militares y paramilitares replegaron a las guerrillas a sus corredores estratégicos de movilización (Observatorio de Paz y Reconciliación, 2007, p. 12). El accionar de las guerrillas estaba marcado además por la creciente confrontación entre el ELN y las FARC (García, 2009).

Desde el año 2002, se sumó a la confrontación con la guerrilla y entre guerrillas, el enfrentamiento entre el Bloque Metro y el Nutibara (Caicedo, 2006, p. 14). En San Carlos, el control pasó al Bloque Cacique Nutibara, que en el 2003 inició un proceso de consolidación que poco a poco los consagró como el poder armado más fuerte de la

región (Observatorio de Paz y Reconciliación, 2007, p. 88). Una vez se desmovilizó fue reemplazado por el Bloque Héroes de Granada, que sólo se desmovilizaría hasta el 1° de agosto de 2005.

Mientras San Carlos tuvo una presencia temporal de la guerrilla, Apartadó registra una larga historia de confrontación. A 1967 se remite la presencia de las FARC y el EPL. Centrarón su accionar en las zonas rurales portando las banderas de la “lucha campesina” y contando con el soporte del trabajo desarrollado por el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) y el Partido Comunista (PC) (Ramírez, 1997, p. 102). Bajo el marco de la “Doctrina de Seguridad Nacional” el accionar de las guerrillas fue fuertemente reprimido. La acción militar no logró, sin embargo, disminuir los niveles de violencia regionales (Botero, 1997, p. 144). La persistencia de los problemas sociales en la región permitió la intensificación de la actividad guerrillera a partir de la década del 80. Los movimientos armados replantearon su estrategia expandiendo sus frentes y trasladándose de las zonas marginales hacia las agroindustriales (Ramírez, 1997, p. 102).

En marzo de 1984, las FARC —el día 28— y el EPL —el 24— firmaron una tregua con el gobierno de Belisario Betancur. El armisticio les permitió a las guerrillas consolidar su presencia en la región y ampliar su apoyo político. Es importante notar que con este trabajo, en Apartadó las guerrillas lograron permear las luchas sociales, lo que no sucedió en el caso de San Carlos con los nacientes movimientos cívicos. Las FARC consolidaron su trabajo con el Sindicato de Trabajadores del Banano (Sintrabanano) y crearon los primeros comités de la Unión Patriótica (UP) (Ortiz, 1999, p. 73). El EPL se fortaleció militarmente y apoyó al Sindicato de Trabajadores Agropecuarios (Sintagro) (Martín, 1986, p. 61). Este proceso de consolidación generó disputas entre las guerrillas por el dominio político de la región. A esta disputa se sumaron los ataques del ejército. El ascenso de los ataques llevó al EPL a renunciar al proceso de paz en 1985. Se intensificó entonces la confrontación, segmentando a la región —y especialmente al municipio de Apartadó— en territorios de guerra a favor de una u otra guerrilla⁵. El ascenso de la confrontación llevó al gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) a declarar a Urabá como zona de emergencia y a instaurar la Jefatura Militar (García, 1999, p. 97).

El retorno de la “política de la guerra” por parte del estado, sumado al establecimiento de la Coordinadora Nacional Guerrillera y a la cancelación de la personería jurídica de los sindicatos generó condiciones para el acercamiento y distensión entre las guerrillas (Suárez, 2006, p.

⁵ Las FARC dominaban el corregimiento de San José y la comuna 1 del casco urbano de Apartadó, en tanto que el EPL dominaba el occidente del municipio más relacionado con la economía bananera (Suárez, 2006, p. 184).

186). Este acercamiento permitió la unión de los sindicatos alrededor de Sintrainagro y los éxitos electorales de la Unión Patriótica y el Frente Popular (Suárez, 2006, p. 192).

En 1989, el EPL inició un proceso de desmovilización que culminó bajo el gobierno de César Gaviria (Salgado, 1992, p. 78). Tras el proceso de reinserción, la organización decidió concentrarse en el trabajo político con el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Sin embargo, el proceso de reinserción no llenó las expectativas de los militantes, que además sufrían los ataques de un ala disidente del EPL liderada por Francisco Caraballo (Salgado, 1992, p. 126). Esta situación dio origen a los Comandos Populares que degeneraron rápidamente en un grupo ofensivo (Comisión, 1995, p. 33). Como respuesta, las FARC impulsaron las Milicias Bolivarianas y surgió una nueva etapa de guerra entre guerrillas (Salgado, 1992, p. 128). Mientras que los procesos de paz y la confrontación entre guerrillas tuvieron un papel importante en Apartadó, en San Carlos la confrontación entre el ELN y las FARC sólo se presenta en 1999.

Como respuesta a la creciente situación de violencia en Apartadó, tuvo lugar la “Operación Retorno” enmarcada en la política de “Guerra Integral” del presidente César Gaviria. Las nuevas medidas de inversión privada y presencia militar no lograron transformar las dinámicas de violencia regionales. Estas se multiplicaron por la incursión de los paramilitares en el eje bananero. Una vez lograron hegemonía en el norte de Urabá, avanzaron hacia el centro bajo la figura de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y el discurso de “la pacificación”, encontrando apoyo en propietarios bananeros y ganaderos interesados en recuperar el control político y el orden público en la zona. En Apartadó la incursión paramilitar tiene impactos diferenciales en la población, dada la historia anterior de confrontación entre guerrillas. Esto no parece suceder en el caso de San Carlos. En los dos casos la presencia paramilitar es convocada por empresarios y élites políticas locales. Con la aparición de los paramilitares se diluyeron los comandos populares y se replegó la disidencia del EPL. Las FARC, por su parte, intentaron mantener su dominio sobre la zona montañosa del municipio a través del llamado “Plan Dignidad” (González *et al.*, 2002, p. 127). Mientras la confrontación se agudizaba, Urabá fue declarada nuevamente “Zona especial de Orden público”. La confrontación se mantuvo entre 2000 y 2004 con un alto costo para la población civil. El 25 de noviembre de 2004 se desmovilizaron las estructuras paramilitares presentes en el Eje Bananero.

La coyuntura actual.

Según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, entre 2000 y 2009 se registraron en el municipio de San Carlos 85 desapariciones, 314 homicidios, 15 secuestros, 153 accidentes

con minas, 23 masacres y 15.382 desplazados (Observatorio de DDHH, 2007). Por efecto de la violencia, 38 veredas quedaron deshabitadas y 15 parcialmente deshabitadas (Observatorio de Paz y Reconciliación, 2007, p. 53). La población municipal, que para 1985 era de 29.156, en 1993 descendió a 24.326 y en 2005 a 11.854 habitantes. Las pérdidas dejadas por la violencia en el municipio son incalculables; las víctimas fueron principalmente hombres, campesinos, líderes comunitarios y funcionarios públicos (Observatorio de Paz y Reconciliación, 2007).

En la actualidad, los sancarlitanos se debaten entre dos percepciones: la de ser sobrevivientes de un proceso de violencia indiscriminada y la de vivir en medio de un escenario de tranquilidad. Han emprendido además importantes procesos de desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos y de recuperación emocional de las víctimas a través de iniciativas propias como el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE). Estos procesos han estado acompañados de las iniciativas gubernamentales de Reparación y Reconciliación promovidas por el gobierno nacional que han traído un “boom” de reparaciones administrativas, la búsqueda de la verdad de los familiares de las víctimas y un discurso de reconciliación puesto a prueba en la convivencia con 46 desmovilizados que habitan en el municipio.

La posición favorable de la población hacia los procesos de reparación y reconciliación no está exenta de dudas. Estas no logran ser aplacadas ni por la declaración de presencia efectiva en el 100% de las veredas por parte de la Fuerza Pública, ni por sus afirmaciones sobre el debilitamiento de los frentes Carlos Alirio Buitrago del ELN y 9 y 47 de las FARC (Observatorio de DDHH, 2007).

Los consensos existentes entre la población de San Carlos frente a la violencia y los procesos de reparación y reconciliación contrastan con las fuertes diferencias encontradas en Apartadó. Los anuncios de las vallas y las conversaciones con los habitantes del municipio parecieran querer sepultar el pasado de violencia con frases que reivindican la pacificación: «El pueblo urabaense y su ejército unidos, por la seguridad de todos, no podemos permitir lo del pasado», dicen las vallas; «esto está muy bueno por aquí, estuvo maluco antes, pero eso ya pasó, ya se pacificó la zona», repiten una y otra vez los habitantes del municipio. Sin embargo, el pasado inevitablemente sale a flote, cuestionando la idea de la pacificación: en una de las plazas del casco urbano de Apartadó emerge del suelo con la forma de una aleta de tiburón un monumento en conmemoración a algunas de las víctimas que dejó la violencia en el municipio. Los pronunciamientos y acciones de la comunidad de paz de San José de Apartadó también han mostrado a los habitantes del municipio que la violencia no ha terminado, al tiempo que han señalado el papel que en esta ha tenido el Estado. Las versiones libres y los

procesos de reparación administrativa han renovado y cuestionado la historia de la pacificación. Han crecido las divisiones sobre la historia y sobre la pertinencia y oportunidad de los procesos de reparación y reconciliación. Para algunos constituyen una respuesta del Estado, para otros una estrategia de evadir la historia y las acciones de justicia que debería emprender el Estado.

Estas discusiones surgen en un contexto marcado por la recuperación de la iniciativa bélica por parte de los frentes 5, 38 y 54 de las FARC y la contraofensiva de las ACCU sobre las supuestas zonas de influencia subversiva. La crisis humanitaria aumentaría cuando el frente Turbo, comandado por Hernán Hernández, y el frente Bananero, a cargo de alias *Cepillo*, asumieron el control de la jurisdicción del eje bananero (Observatorio de DDHH, 2004). Las dinámicas de la confrontación cambiaron el 25 de noviembre de 2004 cuando se desmovilizó el Bloque Bananero (Unión de los frentes Turbo y Bananero). Después de la desmovilización es notable el incremento de la delincuencia común en el Urabá Antioqueño. En Turbo, Chigorodó y Apartadó han aparecido pandillas y bandas que cometen diferentes tipos de delitos y que aumentan la percepción de inseguridad. Por otra parte, se ha fortalecido el narcotráfico en la región, a la vez que han aumentado las luchas por el control del negocio. Los rumores y denuncias sobre el accionar de nuevas generaciones de grupos paramilitares al servicio de narcotraficantes, ganaderos, bananeros, empresarios y comerciantes aumentan (Observatorio de DDHH, 2004, pp. 41-42). Para las FARC, por su parte, sigue siendo un objetivo estratégico la recuperación de Urabá, por ello han propiciado ataques a la Fuerza Pública y homicidios aislados para ganar influencia y castigar lealtades. Es en este contexto en donde la población se divide entre quienes niegan la historia de violencia, quienes la reivindican, quienes aceptan los procesos de reparación y quienes los rechazan.

Si bien los dos municipios comparten la crisis humanitaria, los procesos de desmovilización, el “boom” actual de la reparación y las sospechas del rearme, presentan un contraste importante en la relación con el pasado de violencia y en la forma de asumir estos procesos de reconciliación, reparación y búsqueda de la verdad. Mientras en San Carlos es evidente el consenso frente a estos procesos, en Apartadó son públicas y evidentes las divisiones.

Esta comparación inicial entre los “marcos del recuerdo” en San Carlos y Apartadó muestra que las diferencias en la estructuración de la sociedad y en el desarrollo de su temporalidad implican actitudes y experiencias diferentes con respecto a los procesos de recuerdo, reconciliación y reparación. La construcción diferente de territorialidades e identidades lleva a vulnerabilidades y procesamientos distintos de la violencia.

Una mayor homogeneidad religiosa y étnica parece producir memorias conformistas frente a las memorias militantes y políticas de la sociedad pluriétnica y laica. En los dos casos, la precariedad histórica del estado sumada a impactantes proyectos de desarrollo genera fuertes luchas sociales que, en el caso de Apartadó, son permeadas por los actores armados. Los hechos de violencia en Apartadó adquieren entonces significados grupales, lo que parece dividir de partida el relato de la violencia. La versión sobre la historia de la violencia puede variar también según el nivel de dominio del estado y de los grupos armados. Se construye una versión distinta de acuerdo con el juego entre hegemonía y subalternidad. La preeminencia de dominios en disputa como es el caso de Apartadó parece generar memorias divididas. Los dominios hegemónicos registrados en San Carlos permiten mayores consensos en el recuerdo de los hechos violentos.

El contraste entre estos municipios deja entonces nuevas preguntas: ¿por qué es diferente la relación con los procesos de reparación y reconciliación?, ¿tiene que ver con la forma en que se ha construido el recuerdo de la violencia?, ¿qué hace que se pueda generar una versión de la historia compartida y una versión de la historia que divida?, ¿cómo sociedades distintas producen formas diferentes de memoria frente a los hechos de violencia?

Los juegos de la memoria

La reflexión teórica muestra que es imposible encontrar una memoria, una visión y una interpretación universal del pasado. La memoria es un espacio de lucha política y así lo reconocen también las víctimas.

Yo creo que la verdad nunca ha existido porque cada quien tiene su verdad entonces los victimarios tienen una verdad, los que les pagaron otra, el gobierno tiene otra, una verdad completa no va a haber (Peralta, 2009).

Los marcos sociales de la memoria nos explican el trasfondo del recuerdo en San Carlos y Apartadó, pero no cómo se “jugó” ese recuerdo en las diferentes etapas de la violencia. Si bien difícilmente se pudo reconstruir la polifonía de voces presentes en el recuerdo de la violencia, sí se intentó construir algunas hipótesis sobre las narraciones de los años 80, 90 y la etapa reciente en cada uno de los municipios.

Los años 80: “La violencia contra nosotros” vs “la violencia de ellos y de nosotros” .

San Carlos: “La violencia contra nosotros” (1980-1987).

Si bien la prensa de la época señala que los hechos de violencia que tuvieron lugar en San Carlos en la década del 80 obedecieron a una

“ola de violencia” en el municipio, la memoria actual antes de hablar de los hechos, los inscribe en el conflicto social generado por la presencia de las hidroeléctricas.

¿Quiere que le cuente sobre la muerte de mi hermano? Para eso le tengo que contar desde 1980, cuando empezaron las hidroeléctricas acá en este Oriente [...]. En el 78-79 esto era un pueblo de campesinos, ganaderos, trabajadores. De un momento a otro llegó ese supuesto progreso, donde apareció una población flotante de 20 mil personas adicionales y los campesinos abandonaron el campo para venirse a la ciudad. En un principio la gente dijo: “no, ¡esto es la panacea!” [...] una cantidad de gente inquieta que viendo cómo acababan con la cultura del municipio, con las reglas de buen comportamiento, y por los malos servicios públicos se organizó con el propósito de mejorar la calidad de vida de la gente⁶.

La idea de la “ola de violencia” difundida por los medios de comunicación muestra su silencio sobre causas y autores. Refleja además un juego entre las memorias disidentes de los que estaban siendo asesinados y las memorias hegemónicas de élites tradicionales que pudieron haber influido en la agenda mediática; élites que se expresaron a través de documentos de archivo centrados en los impactos de las hidroeléctricas. Los medios y el archivo dejan entonces múltiples homicidios sin explicación que tendieron un manto de duda sobre la víctima. Por eso sus familiares en la actualidad antes de explicar qué pasó, aclaran a través de las causas que esas muertes se inscribieron dentro de lógicas políticas y económicas.

La narración presenta también múltiples discusiones sobre el número de víctimas. La prensa da cuenta de la muerte de 7 líderes cívicos; el archivo registra 7 asesinatos en las zonas rurales sin ofrecer mayor explicación, y los habitantes del municipio hablan de cientos de muertes. Se trata de contradicciones que pueden reflejar juegos de poder o dolores diferencialmente repartidos. La desaparición de cada uno de los líderes cívicos puede tener tal impacto sobre la memoria que se pierden las proporciones de los hechos. Perder a líderes como Julián Conrado pudo haber representado perder a cientos de personas. La falta de reconocimiento de estos hechos aumenta el impacto.

En el 83 asesinan a media cuadra del parque a Julián Conrado David [...] un domingo a las 10 AM, esto lleno de gente, lo citaron al consultorio y pam pam pam aquí en la plaza. [...] Él nunca fue lo que significó, me comprende, ¿no? era un dirigente cívico el HP, una lumbrera, era un filántropo, asesinar a ese señor que atendía gratis a los muchachos, ¡querido por todo el mundo!... a partir de eso se desbocó la violencia⁷.

⁶ Entrevistas realizadas a familiares de víctimas de la década del 80. San Carlos, julio de 2009.

⁷ Entrevistas realizadas a familiares de víctimas de la década del 80. San Carlos, julio de 2009.

Las diferencias vuelven a aparecer a la hora de preguntarse por los autores de los hechos violentos. La prensa no los identifica y se limita a mencionar “desconocidos”, “no identificados” o “Sicarios”; por su parte, los documentos de archivo no hacen referencia a autores. En el municipio actualmente se culpa en voz baja al MAS y también a la policía, al ejército y a las autoridades municipales.

[...] fueron a Puerto Berrío a decir que esto era acá un nido de guerrilla, que habían unos líderes guerrilleros, como había gente acá dura con el gatillo entonces fueron allá y con el tiempo fueron cuadrando⁸.

En el momento en que sucedieron los hechos, nadie hablaba de los culpables. Esta situación dio motivos al ELN para acusar al gobierno, a las fuerzas militares y a los paramilitares de «impulsar la guerra sucia en el municipio», justificando así una nueva ola de violencia municipal. De esta manera, se evidencia que un discurso incompleto sobre los hechos de violencia permite que “alguien” se tome la vocería para dar su versión. La no dignificación de los muertos a través de la búsqueda de explicaciones, la impunidad sobre los autores, el no reconocimiento de las víctimas o de su importancia, dejó en San Carlos las bases para la reproducción de la violencia. Por ello, para los habitantes del municipio en la actualidad, la consecuencia más importante de lo sucedido en los años 80 fue el surgimiento de una nueva etapa de violencia.

Aparecieron las guerrillas aquí a tomar revancha por lo que hicieron los masetos, diciendo: “venga pues, hasta aquí llegaron esos hijueputas”, y empieza la guerrilla a matarlos, y dele y mate y mate y mate, y mataron a un concejal villeguista y mataron a otro y a un man que era rata y otro y otro⁹.

Ni el archivo ni la prensa registraron lo que significó la violencia para las víctimas: el inicio de una cadena de muertes, dolor, pérdidas materiales, desplazamientos, descomposición familiar. Esas pérdidas, como los autores y los nombres de muchas víctimas, se mantuvieron en silencio, en la esfera privada. Individualmente, las personas buscaron explicaciones para dignificar a sus muertos y asumieron los costos de una violencia que sienten fue “contra ellos”. Las memorias oficiales no discuten estos aspectos, los silencian y se libran de las responsabilidades con un relato incompleto.

Apartadó: “La violencia de ellos y de nosotros” (1980-1987).

En la actualidad, en el municipio de Apartadó se recuerda la violencia de la década del 80 como un problema ajeno. No se recuerda la violencia como un todo, sino como experiencias personales, con lógicas poco comprensibles.

⁸ Grupo focal realizado por el Grupo de Memoria Histórica. Febrero de 2010.

⁹ Entrevistas realizadas a familiares de víctimas de la década del 80. San Carlos, julio de 2009.

El día 15 de febrero salió de la casa a las 5:30 AM a comprar la carne a la siguiente cuadra. Al instante escuché unos tiros, le avisé a mi hijo y cuando [...] llegó la policía, le hizo el levantamiento (Correa, 2007, p. 32).

Frente a la nitidez de los recuerdos de violencia en San Carlos, en Apartadó no se encontró una narración tan detallada de lo que pasó. Desde la actualidad se perciben como hechos ajenos y que solo involucraron a los trabajadores bananeros. La memoria actual parece dejar de lado los 119 registros encontrados en prensa y archivo sobre hechos de violencia política que tuvieron lugar en las zonas urbana y rural. Tal vez la violencia se rutinizó y por ello la sociedad simplifica lo que pasó. En contraste con San Carlos la explicación de la violencia en Apartadó parece no ser asumida por los familiares de las víctimas. En Apartadó los culpables asumen y explican la violencia. Las víctimas entienden la lógica de guerra, pero la dejan implícita en sus narraciones.

Por allá hace por ahí unos quince años, pasó una violencia muy grande. Mataron a diez jóvenes. Todavía me recuerdo yo de eso y me dan ganas de llorar. A un señor que tenía dos hijitos jovencitos se los mataron. Los cogieron dizque porque eran guerrilleros, y uno no sabía qué era eso. Eso le dijeron al señor, lo amarraron, que él mantenía a la guerrilla... Y a todo el que iba llegando a comprar la miel lo iban dejando. Y ya cuando los cogieron a todos, porque ya no apareció más gente, entonces los sacaron y los fueron matando por el camino (Nieto, 1998).

En los artículos de prensa se evidencia también la tendencia a mostrar la violencia como resultado del caos o bien a dejar su explicación en manos de los actores armados. Estos dan cuenta de la confluencia de múltiples violencias en la guerra de Apartadó: la violencia obrero patronal, la violencia del estado y la violencia entre guerrillas.

[...] la guerra sindical se impone por un hecho y es que todo el núcleo nuestro estaba concentrado en Currulao. Eso permitió que hacia Riogrande, el Tres, Coldesa, la Suerte y San Jorge, que eran los puntos fuertes del sindicato, creciera nuestro trabajo. Nosotros no entendíamos que esos sectores eran corredores estratégicos de las FARC hacia la carretera y hacia la cordillera. Necesitaban ser hegemónicos en esos lugares, porque necesitaban gente confiable alrededor de la carretera para ellos poder subir o bajar de la montaña (Benavides, 1996, p. 139).

Cuando la acción de los actores armados vulneró la vida de los miembros de las organizaciones sociales se construyó un discurso que condenó los hechos, pero que no profundizó en sus causas ni rechazó sus motivaciones. En documentos de Sintrabanano, Sintagro y Sindebras de 1987, las organizaciones repudiaban los crímenes que estaban «sucediendo como también toda actividad delictuosa contra bienes, honra y vida de la ciudadanía, entre ellos el secuestro, el chantaje, el boleteo y la extorsión» (García, 1996).

En el caso de Apartadó la disputa por la explicación de la violencia no se libra entre las instituciones controladas por ciertas élites y los ciudadanos como en el caso de San Carlos; es una disputa dentro de la misma sociedad según sea su adscripción a uno u otro actor armado. Es la discusión entre memorias militantes que justifican unas violencias y no aceptan otras, en el marco de dominios que no han logrado hegemonía. En la actualidad, la sociedad sancarlitana, frente a las instituciones y la prensa, dignifica a sus muertos a través de las explicaciones de lo que pasó. En Apartadó se mantienen las explicaciones dadas por los grupos armados.

A pesar de que en Apartadó los actores armados explican la historia de la violencia, no tiene lugar la discusión sobre los autores de los hechos que sí se registra en San Carlos. Pero, si bien es claro en la memoria local que las guerrillas generan buena parte de los hechos de violencia, quedan dudas frente a la acción de las fuerzas militares y de los escuadrones de la muerte. Es precisamente esta la violencia que ha sido olvidada en la actualidad en la zona urbana y que se reivindica en el ámbito rural.

[...] no nos dejaba trabajar: apenas uno levantaba la cosecha, ellos entraban; amarraban y encerraban a las mujeres; a los hombres los golpeaban hasta aporrearlos mucho. Todas las cosechas de los últimos cuatro años se habían perdido por ellos (Nieto, 1998).

En San Carlos la consecuencia más evidente de la violencia de la década del 80 es la inauguración de una nueva etapa de confrontación, dada la discusión sobre los culpables. En Apartadó el periodo concluye con múltiples iniciativas para el respeto de los derechos humanos y el diálogo entre grupos armados. Sin embargo, las iniciativas portaban diferentes comprensiones de lo sucedido: los actores armados le apostaron a negociar los aspectos estructurales y militares de la confrontación; el estado proponía soluciones militares, y la sociedad reivindicaba el respeto a sus derechos. Diferencias que hicieron imposible el diálogo y que inauguraron una nueva etapa de profundización de las divisiones ya existentes. La ambigüedad sobre los autores de los hechos de violencia generó nuevos ciclos de violencia en San Carlos. En Apartadó los genera la diversidad de soluciones frente a la violencia. En los dos municipios las víctimas narran también sus pérdidas económicas y afectivas como consecuencia de la violencia. Estas pérdidas quedan relegadas a la vida privada.

Los años 90: “La violencia para defendernos” vs “la violencia fue culpa de ellos”.

San Carlos: “La violencia para defendernos” (1988-1997).

Un referente constante de la violencia de esta etapa en San Carlos son las amenazas y asesinatos de mujeres adolescentes por parte del ELN como consecuencia de sus relaciones con policías y militares. Esta historia fue contada en su momento por la prensa

Laura Gómez interrumpió la novena al Cristo de “El Popo” para llamar a su casa desde el teléfono público ubicado a los pies de la imagen: “Mamá, traiga el rosario y rece que vinieron por mí [...]”. Cuando la madre de la joven llegó al lugar, Laura les insistía en que si no la querían ver por el pueblo se lo hubieran hecho saber. Le nombraron el apellido de un policía y le preguntaron que si lo conocía. [...] La mamá de Laura y el niño aún estaban llorando sobre el cadáver cuando esa misma noche en las calles de San Carlos se regó el rumor de que el ELN había comenzado a cumplir sus amenazas (Mogollón, 1999).

El relato ejemplifica bien el tipo de memorias que aún persisten sobre esta etapa. En la reconstrucción actual de lo que pasó en la década del 90, no se mencionan las causas de la violencia, sólo se hace referencia a lógicas militares. Lógicas que tuvieron protagonismo en la información de prensa de la época que reprodujo múltiples comunicados del ELN y las FARC para explicar los hechos de violencia. En los comunicados recordaban el carácter popular de la lucha y ubicaban sus acciones en el marco de objetivos políticos:

[...] nacimos como consecuencia del terrorismo y la represión del Estado contra el pueblo. Somos y seguimos siendo ALTERNATIVA DE PODER. Somos el ejército del pueblo¹⁰.

Este control de la producción de la información sobre la violencia es ratificado por la guerrilla cuando quema el archivo municipal. El predominio en el discurso de la época de las acciones de la guerrilla deja de lado la violencia atribuida al ejército. Al respecto, algunos testimonios actuales y documentos de archivo muestran los extremos controles que se ejercían sobre la población.

Entonces qué pasaba. Que nos esperaban en todos los caminos, carreteras, en la carretera bajaban la gente, los que tenían sindicatos que eran colaboradores de la guerrilla y ellos hacían el retén allí arribita por Piedras Blancas, no dejaban sino pasar 3 libritas de arroz, una librita de manteca, 2 frasquitos de aceite. Un control tremendo y eso que la mayoría era con lista en mano. Hubo mucha parte donde mataron gente de las tiendas. Entonces ya uno viendo toda esa remetida, entonces ya uno muchas veces tenía que terminar con todo lo de valor¹¹.

¹⁰ Panfleto del Bloque José María Córdoba de las FARC, 1997.

¹¹ Grupo focal realizado por el Grupo de Memoria Histórica, febrero de 2010.

Romper “el orden armado” constituía la causa tácita de las acciones violentas. Esto implicó la escasa claridad sobre las víctimas. Se asume en la memoria individual y colectiva que la violencia podía afectar a cualquiera, pero que era un costo frente a un orden aceptado. Diversos sectores del municipio se relacionaron con la confrontación bien porque fueron víctimas, o bien porque les permitió resolver conflictos cotidianos. Sin embargo, algunos sectores sociales fueron más victimizados que otros. En la prensa de la época y en las narraciones actuales se destacan los ataques a funcionarios públicos. Al respecto “explicaba” la guerrilla:

Ellos están haciendo una gestión sobre una región y una población sobre la cual nosotros estamos haciendo una labor política y administrativa. [...] Si nosotros no hacemos ese papel de fiscalización entonces ¿quién lo hace? [...] nosotros no vamos a dejar de ejercer la función que como insurgencia nos compete y es que debemos fiscalizar, porque bien poquita plata que tienen los municipios y bastantes necesidades que tienen, para que se las robe cualquier funcionario sin que nadie diga nada. [...] somos un embrión de Estado en estas regiones (Yarce, 2009).

En esta etapa no se registran discusiones sobre el número de muertos. Se recuerdan algunos homicidios y el incremento de las amenazas. Sobre el tipo de hechos, coincide la memoria actual con los documentos de archivo al mostrar cómo de manera paralela se incrementaron los hechos de violencia política y cotidiana. No coincide la memoria actual con lo registrado en los medios de comunicación en la medida en que estos dieron prioridad a la información sobre los secuestros y ataques a la infraestructura y no informaron sobre los hechos que impactaron la cotidianidad. Aún se reclama que en la información nacional merecieran mayor importancia las torres de energía que el habitante común de San Carlos.

La consecuencia más importante del proceso vivido en los 90, identificada en la actualidad, es la generalización de la violencia. Persiste entonces un discurso ligado a “culpas” por haber aceptado los órdenes de la guerra para “defenderse”.

[...] lo que pasa es que aquí del 94 al 96-97 habían unos amiguitos quienes ayudaban mucho a los campesinos. Entonces mantenían una velita prendida a Dios y otra al diablo porque se iban para allá para los limones a reunirse con la gente de Ramón y Zafiro. [...] fueron ellos los que entregaron al uno y el otro a otro y así se vino esa cadena de muerte tan desastrosa¹².

Si bien las lógicas militares y autorías de los hechos fueron ampliamente difundidas, el vacío sobre las causas estructurales de la confrontación fue asumido en 1995 por el gobernador de Antioquia, quien decidió culpar a la población de la violencia:

¹² Grupo focal realizado por el Grupo de Memoria Histórica, febrero de 2010.

En San Carlos ha habido un control guerrillero preocupante, que tiene amordazada a la población civil que ha infiltrado peligrosamente a la administración municipal y ejercido un poder coercitivo peligroso sobre la clase política (Uribe & Botero, 1998).

Aún se recuerda cómo estas palabras inaugurarían una nueva etapa de violencia que se confirmaría con la llegada de los volantes de “Dignidad por Antioquia” y “resistencia campesina” en los que se anunció la incursión paramilitar.

Apartadó: “la violencia fue culpa de ellos” (1988-1994).

Entre 1988 y 1994, ningún hecho generó tanta discusión y recordación en Apartadó como la masacre de la Chinita. De hecho, la casa de Rufina, en donde sucedió la masacre, se ha convertido en un referente obligado en las narraciones actuales sobre la historia del municipio.

Todo iba bien hasta la 1:30 AM, cuando una de las hijas le dijo a Rufina que desde las bananeras venían unos hombres armados. A partir de este momento y durante 15 minutos todo fue confusión, gritos y bala. En la casa de Rufina decenas de personas trataron de protegerse. Debajo de la cama, entre los escaparates, en las esquinas. Jhon Jairo, el disc jockey, el que consintió toda la noche al Juancho Número Dos Internacional Estéreo, murió atravesado por una bala, que no encontró resistencia en las paredes del rancho que no era sino tablas. En la calle los hombres disparaban a los hombres porque alguien escuchó cuando ordenaban: “¡A las mujeres no!”. Al final, en el silencio que se hizo esa madrugada, quedaron tendidos una mujer y 34 hombres. Los recogieron de la calle, con la botella de aguardiente aún en la mano, y en los ranchos, debajo de las camas, donde intentaron encontrarle el quite a la muerte. Los que se salvaron no supieron a quién agradecerle porque ¡hasta a los muertos los estaban matando!¹³

Los diferentes relatos sobre la masacre de la Chinita, y sobre las masacres en general, son detallados, dan cuenta de las víctimas, el lugar, las formas de victimización. Además de la masacre de la Chinita, en prensa se encontraron otros 14 reportes de masacres en el municipio, entre 1988 y 1994. Siete de estas masacres quedaron sin explicación por parte de los medios, y ocho se inscribieron en la confrontación entre el EPL y las FARC. Pero si bien las masacres han colonizado las narrativas actuales sobre los hechos de violencia en esta etapa, solo constituyeron el 12% de los hechos violentos del municipio reportados en prensa. En mayor porcentaje los medios reportaron homicidios atribuidos a autores “no identificados”, “sicarios” y “desconocidos”, que afectaron a miembros de la UP, trabajadores bananeros, líderes liberales, funcionarios públicos, desmovilizados del EPL, entre otros. Mientras en San Carlos la violencia se extendía a cualquiera que rompiera el orden

¹³ La barbarie sacudió a Urabá (1994, 24 de enero). *El Colombiano*, Medellín.

armado, en Apartadó se empezaba a concentrar en ciertos sectores, en aquellos que representaban el orden del oponente. Aún se recuerdan algunos de los homicidios dependiendo de las identidades políticas. Uno de los más recordados es el asesinato de la alcaldesa de la UP, Diana Cardona, de hecho, un barrio de Apartadó lleva su nombre.

[...] empezaron a matarlos. En la parte de debajo de Apartadó empezaron a matar prácticamente a los concejales; primero matan a Arsenio Córdoba, a Oswaldo Olivo, a José López, Diana Cardona, en los campos. Bueno, empiezan a matar a todos los líderes del partido comunista y de la Unión Patriótica. ¿Qué hacíamos nosotros? Eso ahorita nosotros no lo podemos hacer, anteriormente se denunciaba ante organizaciones colombianas del gobierno, no de derechos humanos y no gubernamentales, sino más que todo del gobierno y resulta que cuando uno hacía esa denuncia, se venían contra el denunciante, mataban al denunciante también¹⁴.

En el relato sobre la violencia en Apartadó parece sugerirse entonces una jerarquía de los hechos violentos según la magnitud y los grupos políticos afectados. Se dio especial importancia a la violencia extraordinaria que además de agredir portaba mensajes asociados con el tipo de víctima, la ubicación del hecho y las estrategias de victimización (Suárez, 2006, p. 80). La Chinita, por ejemplo, constituyó una respuesta a un largo proceso de confrontación entre las FARC y el EPL. Cada detalle adquiría significado para un oponente que a su vez respondería con hechos violentos. El recuerdo de estos hechos portó un mensaje de división entre la sociedad de Apartadó, que persiste en la actualidad y ocultó la violencia que afectó a otros grupos políticos y organizaciones sociales. De esta manera, en San Carlos y Apartadó la espectacularidad o la jerarquización política o económica de los hechos sepultaron la violencia cotidiana. Si bien el mensaje de los hechos era claro, enunciar explicaciones se constituyó en un riesgo:

[...] ellos me persiguieron por cosas que de pronto vi, por eso me siguieron pero yo alcance a hablar con uno y le dije que lo que había visto me lo llevaba a la tumba. Pero donde manda tanta gente no le creen a uno. Yo me iba para el trabajo e iban a preguntar por mí, llegaron a las 7 a mi casa, por detrás del solar me volé [...] me tocó salir corriendo, sin nada (IPC, 2005).

Como en el caso de San Carlos, en Apartadó se delegó la explicación sobre la violencia. Fueron los grupos armados, los partidos y los sindicatos quienes propusieron explicaciones de los hechos basadas en culpas y descalificaciones de otros sectores sociales. Se trató de memorias militantes que inscribían los hechos locales en largos procesos de confrontación. La explicación de lo que estaba sucediendo se delegó entonces a expertos que argumentaron que la violencia municipal resultaba del difícil trámite de las luchas sociales, la disputa electoral entre la UP y Esperanza, y

¹⁴ Entrevista a habitante de San José de Apartadó, 21 de marzo de 2008.

la precaria presencia del Estado. Las explicaciones que atribuyeron responsabilidades al conjunto de la sociedad no trascendieron al discurso actual de la violencia. Trascendieron los discursos de los grupos armados sobre culpables y condenas de muerte. Discursos que crearon divisiones profundas sobre las que se construyó la memoria y a partir de las cuales avanzó y se consolidó un nuevo ciclo de violencia justificado bajo la ambigua consigna de la pacificación.

Entonces vienen ya todas las masacres, empiezan en las bananeras y luego ya pasan a las veredas, entonces ya pasan más a la zona rural, donde también empiezan a haber masacres de los campesinos, muertes selectivas y empiezan a matar sin consideración. Esto lo hacen después de que se unen con el estado y con el paramilitarismo y con los narcotraficantes¹⁵.

Finales de 90: “La violencia contra nosotros” vs “¿cuál violencia?”

San Carlos: “La violencia entre nosotros” (1998-2005).

La historia de la violencia municipal de esta etapa se centra en la descripción de lo que pasó. Son tantos los hechos y las versiones que la memoria de la violencia se va convirtiendo en un gran caos. En la prensa se destacan los atentados y masacres. En el archivo se registran múltiples comunicaciones sobre homicidios. Los registros de prensa y archivo dejan también la sensación de una cadena infinita de hechos sin lógica alguna. Hechos, hechos, hechos, difícilmente abarcables en una sola narración, mezcla de experiencias de desplazamiento, atentados en las vías, desaparición forzada, homicidios. Experiencias relatadas principalmente por mujeres (mamás, esposas, hijas) y que revelan dimensiones diferentes del conflicto: la invasión de la vida cotidiana, la impotencia frente a una guerra que vulneraba a cualquiera, el desarraigo, las dependencias de ayuda, la imposibilidad de denunciar, las demandas de reparación...

[...] apareció un man en la tienda, pálido, ensangrado, pidiéndome que le dejara lavar las manos, incluso le destapé un jabón. El caso es que el man salió y yo me quedé preocupado, cuando ya miré debajo de la puerta había un charco de sangre grandísimo y dije: “¡eh, fue que mi papá estiró la carne ahí o mató un ratón!” En fin, como si nada hubiera pasado di la vuelta y vi a mi papá tirado contra la puerta¹⁶.

Cada uno cuenta el hecho que vivió con detalle como reivindicando su experiencia frente a la rutinización de la violencia.

A quién le duelen estos muertos. Aquí simplemente preguntan cuántos son, cómo los mataron, dónde y quién, pero no piensan en quiénes eran (Yarce, 2009, p. 229).

¹⁵ Entrevistas a habitantes de San José de Apartadó, 21 de marzo de 2008.

¹⁶ Entrevistas a víctimas de la violencia reciente. San Carlos, julio de 2009.

Frente a las preguntas sobre causas y autores las respuestas parecen obvias entre los habitantes del municipio: la violencia afectaba a todo el mundo como si fuera una epidemia. No parece importante ya explicar, bien por la dimensión de los hechos, bien por un cierto sentimiento de culpa compartido de haber entrado masivamente en la lógica de la guerra paramilitar.

Eso era una guerra absurda porque ahí nunca mataban el malo sino el que nada estaba haciendo y el que no tenía las armas, eso fue una bobada que casi en todos lados fue así, eso fue una guerra así por nada (Peralta, 2009).

El silencio sobre las causas desplaza la atención hacia los autores. Para la prensa las FARC realizan la mayor parte de los atentados y los paramilitares la mayoría de homicidios y masacres. En el archivo no es tan clara la identificación de los culpables, pero se atribuyen las masacres a las FARC y las desapariciones a los paramilitares y el ejército. Son nuevamente los actores armados los que cuentan la historia de violencia. Durante el conflicto, los paramilitares explicaron a través de panfletos y entrevistas la lógica de su acción:

Aquí estamos y vamos a disputarle la zona a las FARC. [...] campesinos aléjense de la guerrilla, guerrillero ustedes o nosotros. La guerra sin cuartel ha comenzado¹⁷.

Una vez desmovilizados, “la verdad” parece quedar reducida a sus versiones. En esta “verdad” la población no busca explicaciones estructurales de la guerra, pero sí causas concretas relacionadas con sentencias de muerte, informantes, paraderos de autores materiales, desapariciones. La memoria hegemónica impuesta por el actor armado de turno se prolonga a pesar de que los dominios se hayan transformado.

[...] se les dice la verdad, en ese momento lo que quieren escuchar es la verdad, el motivo, las circunstancias de por qué se desapareció el uno, por qué se asesinó al otro, a nosotros solo nos mandaban “haga esto y haga esto y ya”, lo único que le podemos ofrecer a las víctimas es eso, contarles la verdad que ni crean que económicamente se les puede ayudar (Peralta, 2009).

En las narraciones hay consenso sobre la dimensión de las pérdidas humanas y económicas del municipio a raíz de la violencia. Estas se viven en múltiples escalas: desde los retrocesos en el desarrollo económico del municipio hasta la desestabilización de las economías familiares; desde la pérdida de más de la mitad de la población hasta altos costos emocionales de los familiares de las víctimas.

[...] yo lo digo es porque por ejemplo la ayuda económica hace falta pero una persona bien triste y que le den a uno una plata, uno qué hace con la plata si no tiene a la persona que uno quiere, si fuera que uno con esa plata pudiera devolverle la vida (Peralta, 2009).

¹⁷ Panfleto de las AUC, 1998.

Dentro del caos de experiencias cada uno reivindica su pérdida y enfrenta los debates acerca de la reparación. Si bien es una ayuda necesaria, crea dilemas internos. Dilemas acentuados por la discusión sobre el perdón y la reconciliación. Se convive con los victimarios, pero se los enfrenta constantemente a los daños que generaron. Muchos testimonios coinciden en que si bien se le quiere apostar a la convivencia, el perdón es una tarea difícil y más cuando se espera poco de la justicia. Por eso, esa tarea prefieren delegársela a Dios, no al Estado ni a un nuevo orden armado...

Apartadó: ¿cuál violencia? (1995-2004).

Céfora recuerda que en 1996 las cosas se pusieron mal: «Fue una cosa terrible. En esa finca mataban constantemente. Todos los días asesinaban, cuando no era que los esperaban, cuando llegaban los carros con los trabajadores» (Correa, 2007, p. 95). La violencia marcó los diferentes espacios del municipio:

Todos vivíamos con miedo. Eso fue aterrador. Ya los patrones todos cerraban temprano. Sentíamos esas motos y ya esperamos el golpe, a quién matarían. El parque infantil fue un matadero. Se encontraban de a tres, cuatro ya descompuestos. Donde está la iglesia fue un cementerio. Uno vivía como sonámbulo (Correa, 2007, p. 96).

La angustia de los habitantes de Apartadó se reflejó en los medios de comunicación que informaron sobre el desborde de los homicidios y masacres en el municipio. La arremetida paramilitar en San Carlos y Apartadó hizo que la violencia perdiera toda lógica. En Apartadó también se acumularon experiencias, especialmente de homicidios y masacres.

Lo llamaban y lo llamaban y nosotros no contestábamos, cuando al ratico le digo yo: ¿pa' que lo necesitan?", entonces él no hablaba. Se quedó ahí paralizado, no hablaba, no decía nada. Al ratico yo abrí la puerta y les dije para qué lo necesitan. Ahí mismo lo agarraron, lo fueron empuñando entre varios y lo agarraron de los dos brazos. Entonces vinieron y le pegaban, los otros le pegaban y el otro le daba con el fusil así por encima. Ya se lo llevaron y ahí me quedé sola llorando con los niños que corrían de lado a lado en la oscuridad. Al otro día salimos a buscarlo y ya lo encontramos por acá abajo muerto¹⁸.

Los hechos de violencia generaron múltiples reacciones. Los documentos oficiales muestran que el Estado propuso medidas como: «la prohibición del porte de arma de fuego aun con salvo conducto, la limitación del horario de establecimientos públicos hasta la 1 de la madrugada; la restricción a la circulación de motocicletas entre las 10 y las 5»¹⁹. Se trataba de tomar medidas para responder a los altos niveles de la violencia, pero también de

¹⁸ Entrevista a víctimas de la violencia reciente. Apartadó, enero de 2010.

¹⁹ Informe de orden público (Archivo General de Antioquia-Subsecretaría de apoyo jurídico, 1999).

construir una discusión que relegitimara a un Estado incapaz de controlar la violencia. La prensa, por su parte, a la hora de pensar en consecuencias trataba de leerlas en clave de lógicas militares.

Las víctimas y habitantes del municipio identificaron a su vez las consecuencias de la violencia con marcadas diferencias. Se puede hablar de tres discursos distintos sobre la violencia municipal: el de los desplazados, el de quienes se sometieron al dominio paramilitar y el de quienes generaron acciones de resistencia. Para los desplazados la mayor consecuencia de la violencia fue haber perdido todo, el desarraigo.

A mí me obligó de yo venirme para acá el miedo el terror fue mucho. Pues que pasaran las cosas, pero no, de llegar a tumbarle las puertas a uno, sacarle los seres a uno de su casa, verlos cómo quedaron, cómo los acribillaron, cómo quedaron torturados (Henao, 1998).

Para quienes emprendieron procesos de resistencia en San José de Apartadó, la mayor consecuencia de la violencia fue replantear su proyecto de vida desde la resistencia y la reivindicación de la dignidad, la propiedad y la justicia en el marco de una guerra que inscriben en una historia de persecución:

[...] aquí está la familia, los amigos, los hijos, los hijos de los muertos y esto uno no se puede ir así... en otro lado, en otro lado eso no lo va a encontrar [...] ¿Por qué vamos a salir de aquí? ¿Qué hay aquí? Todo se perdió. Entonces esperamos, pero con la esperanza de que el gobierno atienda lo que hemos pedido en varias oportunidades: que responda por lo que nos han quitado sin hacer nada para protegernos²⁰.

Para quienes se quedaron en el municipio, especialmente en el casco urbano, bajo las normas impuestas por los paramilitares, la violencia trae como consecuencia la adopción de nuevas reglas en la vida diaria. Se adopta el nuevo régimen con la ilusión de descartar la probabilidad de que el pasado resurja. Bien lo dicen las vallas que el ejército ha instalado en la zona: «El pueblo urabaense y su ejército unidos, por la seguridad de todos, no podemos permitir lo del pasado». Para ello, es necesario asumir la ilusión de vivir en un espacio tranquilo que se mantiene no sólo siguiendo ciertas reglas, sino también desconfiando de todos...

La cosa ahora está muy calmada pero igual usted tiene que saber con quién se está metiendo. Tener cuidado de con quién se mete, porque hasta nosotras que somos de aquí, no sabemos del todo quién es quién (Madarriaga, 2006, p. 78).

Cada una de estas posiciones implica no solo formas diferentes de asumir los hechos, sino también actitudes diversas frente a los victimarios y sus explicaciones, en suma, memorias radicalmente

²⁰ Entrevistas realizadas a miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. San José de Apartadó, marzo de 2004.

distintas de lo que pasó. Quienes se han desplazado reivindican los hechos individuales, la propia desgracia dentro del mar de hechos. Quienes resisten exigen explicaciones y proponen sus hipótesis frente a un escenario internacional. Quienes se sometieron al dominio paramilitar durante años aceptaron la explicación de la “pacificación” y en la nueva coyuntura buscan explicaciones no estructurales sino particulares de los hechos de conflicto. Esta diversidad de posiciones hace imposible la construcción de UNA sola versión de lo que pasó.

En la medida en que se buscan aclarar hechos particulares, la discusión sobre las causas de la violencia se diluyó en el debate sobre los autores. En los dos casos la prensa atribuyó la mayor parte de los hechos de violencia a las FARC. La violencia paramilitar se registró en menor proporción o se registró bajo la autoría de “no identificado”. En los dos casos los actores armados tienen la palabra en la construcción de la historia local de los hechos de violencia. Durante el conflicto, los paramilitares a través de panfletos y entrevistas explicaron la lógica de su acción. Una vez desmovilizados, “la verdad” parece quedar reducida a sus versiones. De esta manera, las versiones libres de HH, el Alemán o Hasbun se han constituido en la base del discurso actual de los hechos. Sólo desde la Comunidad de Paz se confrontan estas versiones y se piden nuevas explicaciones a través de procesos judiciales. En los dos casos la memoria hegemónica impuesta por el actor armado de turno se prolonga a pesar de que los dominios se hayan transformado.

No son ya evidentes las identidades de grupo que en épocas anteriores inscribían la propia pérdida dentro de historias de exclusión. Cada víctima emprende su reivindicación. En la Comunidad de Paz, la pérdida se asume en grupo y se anuncia su carácter irreparable. En el casco urbano se enfrentan las discusiones sobre la reparación. Esta se asume como una respuesta “justa” y necesaria en momentos de apremio económico, pero no deja de generar múltiples debates internos y también disputas entre los familiares de las víctimas. Los procesos de desmovilización no implican para el municipio transformaciones importantes en cuanto a la narrativa de la violencia. En San Carlos hay, en cambio, un cierto consenso sobre la necesidad de empezar nuevamente el proyecto de sociedad. No necesariamente hay acuerdo sobre el perdón, pero sí sobre la ruptura de las dependencias con grupos armados. En Apartadó este consenso no parece existir.

Conclusiones: ¿cómo es el proceso de construcción de las historias locales de los hechos de violencia en San Carlos y Apartadó?

- Teóricamente se trata de un proceso que parte de las memorias individuales y que se juega en la construcción de memorias colectivas.

En este recuerdo colectivo se enfrentan constantemente memorias con pretensiones de hegemonía y memorias subalternas que desde el mundo privado reivindican su versión de los hechos. Esta lucha cobra sentido en unos marcos espaciales y temporales particulares.

- En San Carlos la construcción de la historia de la violencia surge en el marco de una sociedad católica, con cierta homogeneidad de condiciones económicas, con élites conservadoras e integradas al proyecto nacional, en medio de procesos de desarrollo acelerados y bajo dominios armados que logran cierta homogeneidad y que impactaron en el nivel individual. En Apartadó se narra la violencia en el marco de una sociedad pluriétnica, laica, marginal, en medio de procesos de desarrollo acelerados y bajo dominios armados divididos y que impactaron en el nivel grupal. Cada marco implica vulnerabilidades distintas frente a la violencia y formas particulares de asumirla.
- En San Carlos se construye en la actualidad un cierto consenso sobre los hechos. Se buscan explicaciones para dignificar a las víctimas, pero en la medida en que los hechos son más recientes se abandonan los argumentos de tipo estructural y priman las lógicas militares. Poco a poco los actores armados colonizaron la construcción del relato de la violencia, disputándose inicialmente la explicación sobre las causas. La población se pregunta constantemente por su papel en la confrontación. Esta reflexión y los impactos personales de la violencia se mantienen en la vida privada. Los costos de la confrontación sustentan el discurso público de volver a empezar un proyecto común más allá de la violencia.
- En Apartadó se construyen memorias divididas de acuerdo con las identidades políticas o con los impactos de la violencia. Esta llega a magnitudes tales, que los hechos se rutinizan. La violencia cotidiana queda incluso sepultada en medio de hechos violentos espectaculares por su nivel de barbarie. Las explicaciones de los hechos se delegan a los actores armados y permiten en algunos momentos fortalecer militancias. Este tipo de construcción no permite que existan consensos sobre el pasado.
- El análisis de los dos municipios deja muchas preguntas, sólo sugiero dos retomando la reflexión de Sánchez: ¿cuánta memoria y cuánto olvido necesita una sociedad? y por otra parte, independientemente de las divisiones al interior de la comunidad, ¿cómo lograr que las narraciones de la guerra no justifiquen nuevas guerras?

Referencias

- Alonso, M. (2007). *Estudio sobre el proceso de desmovilización, desarme y reinserción en Antioquia: anotaciones desde lo local*. Medellín: Comisión Departamental de Seguimiento y Acompañamiento al Proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción en Antioquia.
- Ansaldi, W. (2002). Una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición. *Agora Revista de Ciencias Sociales*, 7.
- Augé, M. 1998. *Las formas del olvido*. Barcelona: Gedisa.
- Bonilla, M. A. (2008). Memoria en las salas históricas del Museo Nacional. Tesis de grado no publicada, Universidad de los Andes.
- Botero, F. (1990). *Urabá: colonización, violencia y crisis del Estado*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Caicedo, L. P. (2006). *Desplazamiento y retorno. Balance de una política: retornar no es sólo volver. Desplazamiento y retorno en San Carlos, Antioquia*. Bogotá: Ilsa.
- Castaño, M. (1996). Desarrollo del Oriente antioqueño entre 1880 a 1930. Tesis de grado no publicada, Universidad de Antioquia.
- Comisión verificadora de los actores violentos en Urabá. (1995). *Informe: Urabá*. Bogotá: CINEP.
- Correa, J. (2007). *De memoria colectiva "Resurgimiento"*. Medellín: Gobernación de Antioquia.
- Cubides, F., Ortiz, C. M. & Olaya, A. C. (1998). *La violencia y el municipio colombiano: 1980-1997*. Bogotá: CES, Universidad Nacional de Colombia.
- Del Pino, P. (2003). *Uchuraccay: memoria y representación de la violencia política en los Andes Jamás tan cerca arremetió lo lejos: memoria y violencia política en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- García, C. I. (1996). *Urabá: región, actores y conflicto 1960-1990*. Medellín: CEREC-INER.
- García, C. I. (1999). Urabá ¿cruce o articulación de conflictos? En IEPRI-FESCOL (Eds.), *Conflictos regionales: Atlántico y Pacífico*. Bogotá: Editorial CEREC.
- García, C. I. (2009). *Territorio y conflicto. Tensiones y tendencias de la transformación regional. El caso del Oriente Antioqueño*. Medellín: Instituto de Estudios Regionales.
- Halbwachs, M. (2004). *La memoria colectiva*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Henao, H. (Coord.). 1990. *San Carlos, Antioquia*. Medellín: CORNARE- Universidad de Antioquia-Iner.
- Jelin, E. (2001). *Los trabajos de la Memoria*. Madrid: Editorial Siglo XXI.
- Knapp, S. (1989). Collective Memory and the Actual Past. *Representations* (Special Issue: Memory and Counter Memory), 26.
- López, H. (2005). *El mercado laboral en el oriente antioqueño*. Bogotá: Naciones Unidas.

- Madarriaga, P. (2006). *Matan y matan y uno sigue ahí*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Margalit, A. (2002). *La ética del recuerdo*. Barcelona: Herder.
- Martin, G. (1986). Desarrollo económico, sindicalismo y proceso de paz en Urabá. Tesis sin publicar, Universidad de los Andes.
- Nieto, P. (1998). Los vencidos. Una historia sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Tesis sin publicar, Universidad de Antioquia.
- Novoa, E. (2009). *Luchas cívicas, trayectorias geopolíticas en Colombia: Movimiento cívico del oriente Antioqueño, Movimiento popular los inconformes y Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Observatorio de Derechos Humanos Vicepresidencia de la República. (2007). *Diagnóstico departamental Antioquia 2003-junio de 2007*. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/diagnosticos/2007/antioquia.pdf
- Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño. (2007). *Estudio de diagnóstico y contextualización de los 23 municipios del Oriente antioqueño sobre la situación del conflicto político armado, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, las organizaciones sociales y la gobernabilidad democrática*. Medellín: Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño.
- Ocampo, N. (2005). Análisis de coyuntura del conflicto armado en el oriente antioqueño. Tesis de grado no publicada, Universidad de Antioquia.
- Ortiz, C. M. (1999). *Urabá: tras las huellas de los inmigrantes 1955-1990*. Bogotá: ICFES.
- Piper, I. (2005). Obstinaciones de la memoria: la dictadura militar chilena a través del recuerdo. *Athenea Digital*, 8.
- Ponciano del Pino, H. (2003). Uchuraccay: memoria y representación de la violencia política en los Andes, en *Jamás tan cerca arremetió lo lejos: memoria y violencia política en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos -IEP-.
- Ramírez, W. (1997). *Urabá: los inciertos confines de una crisis*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Ranalletti, M. (1998). Memorias en pugna. Historia, memoria e historiografía de la Argentina contemporánea. *Desarrollo Económico*, 37 (148).
- Rappaport, J. (2000). *La política de la memoria, interpretación indígena de la historia en los Andes Colombianos*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Ricoeur, P. (2004). *La memoria, la historia, el olvido*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- Romero, M. (2004). Los trabajadores bananeros de Urabá: ¿de “súbditos a ciudadanos”? En M. García & B. de Sousa (Eds.), *Emancipación social y violencia en Colombia*. Bogotá: Editorial Norma.

- Rousso, H. (1998). *La Hantise du passé*. Paris: Textuel.
- S.A. (1989). *Relaciones de poder en los municipios de Alejandría, Granada, Guatapé, San Rafael, San Carlos* (sin publicar).
- Sánchez, G. (2003). *Guerras, memoria e historia*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-.
- Steiner, C. (1990). Urabá un cruce de caminos. En *Colonización del bosque húmedo tropical*. Bogotá: Fondo de Promoción de la Cultura.
- Suárez, A. (2006). *Masacres, guerras e identidades*. Tesis sin publicar, Universidad Nacional de Colombia.
- Todorov, T. (2000). *Los abusos de la memoria*. Barcelona: Paidós.
- Uribe, L. & Botero, L. (1998). San Carlos: la costica dulce de Oriente: la participación política de las organizaciones sociales en la gestión pública. Tesis de grado no publicada, Universidad de Antioquia.
- Uribe, M. T. (1992). *Urabá: ¿Región o territorio?, un análisis en el contexto de la política, la historia y la etnicidad*. Medellín: Corpouraba-INNER.
- Uribe, M. T. (2006). *Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia*. Medellín: La Carreta Editores.
- Van Evera, S. (2002). Memory and the Israel-Palestinian Conflict: Time for New Narrative. Seminario del MIT.
- Vicepresidencia de la República. (2010). *Dinámica reciente de la confrontación armada en el Urabá Antioqueño*. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicaciones/uraba.pdf